

MADRID

Privatización y segregación

La escolarización madrileña durante el último gobierno de Esperanza Aguirre ha roto el sistema educativo español a través de una política segregadora de “apartheid” del alumnado con el objetivo de privatizar el servicio público educativo

CCOO exige una normativa de escolarización que impida la concentración del alumnado con dificultades de aprendizaje en los centros públicos y garantice el equilibrio y la integración educativa entre las dos redes.

El Informe de Escolarización del sindicato, correspondiente a los años del último gobierno regional del PP, denuncia la privatización y segregación escolar. El desproporcionado crecimiento de la enseñanza privada se hace a costa del alumnado autóctono de la pública que recibe, en contraste, a 8 de cada 10 nuevos alumnos extranjeros -y que escolariza a 8 de cada 10 alumnos con dificultades de aprendizaje, ya sean ACNEEs, alumnos de garantía social, compensatoria o alumnado de origen inmigrante-.

La exagerada privatización de la enseñanza en Madrid contrasta con la evolución de las dos redes en el resto del Estado, de tal manera que de los 38.126 nuevos alumnos que crece la enseñanza privada en toda España, 33.804 alumnos –el 88,6%- son madrileños. Contrariamente a lo que sucede en Madrid, donde el gobierno regional canaliza el 83% del crecimiento del alumnado a la privada y el 17% a la pública, el resto de las comunidades autónomas, sin excepciones incluidas las gobernadas por el PP-, orientan su crecimiento hacia la pública, en altos porcentajes: Cataluña 98%, Baleares 96%, Valencia 84%, Murcia 65%, Navarra 96%, País Vasco, 80%, Andalucía 76%... El informe destaca la privatización producida en la escolarización de la etapa de educación infantil

Inicio de curso: ideología y desgobierno

LA MAYOR imprevisión de los últimos años ha dejado sin instrucciones de inicio de curso a los centros que se han visto envueltos en la desorientación para organizar las clases del nuevo curso. Todo ello, sin que las grandes declaraciones ideológicas de Esperanza Aguirre contra el Gobierno central hayan servido para afrontar los problemas reales de la enseñanza.

CCOO ha denunciado la falta de plazas públicas, las obras de construcción y mejora inacabadas en, al menos, 45 centros; unos 270.000 niños en aulas masificadas; las becas que no han alcanzado a 300.000 familias; el crecimiento paulatino del % de repetidores que reduce drásticamente las tasas de idoneidad escolar y los desequilibrios y la desigualdad en la escolarización del alumnado con especiales necesidades de aprendizaje, así como en la distribución territorial del éxito-fracaso escolar. Sin olvidar el grave problema que afecta a la enseñanza concertada de la mano del incumplimiento del Acuerdo de Analogía retributiva que

ha venido generando importantes movilizaciones y la presentación de un conflicto colectivo, por parte de los sindicatos.